Reclamación expediente N° 12/2016
Resolución N.º 24/2017

CONSEJO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y BUEN GOBIERNO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

COMISIÓN EJECUTIVA

Sres.:

Presidente: D. Ricardo García Macho

Vocales:

D^a. Emilia Bolinches Ribera

D. Lorenzo Cotino Hueso

D. Carlos Flores Juberías

D^a. Isabel Lifante Vidal

En Valencia, a 10 de marzo de 2017

Reclamante: [REDACTED]

Sujeto contra el que se formula la reclamación: Dirección General de Tributos y Juego. Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Generalitat Valenciana

VISTA la reclamación número 12/2016, interpuesta por [REDACTED] contra la Resolución del Director General de Tributos y Juego, por la que se estima parcialmente la solicitud formulada por la mercantil [REDACTED] sobre copia del expediente de concesión de autorización de instalación de salón de juegos en favor de [REDACTED] siendo ponente el Vocal Sr. D. Lorenzo Cotino Hueso, se adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

Primero.- [REDACTED], parte reclamante, había iniciado expediente de autorización de salón de juego en Elche.

La mercantil [REDACTED], solicitó posteriormente autorización de instalación de un salón de juego en dicha localidad, que fue inadmitida por mediar la solicitud previa de [REDACTED] en distancia próxima. [REDACTED] recurrió dicha resolución y solicitó copia del expediente. Dicha solicitud de copia de expediente se tramitó conforme a la Ley 2/2015.

[REDACTED] se opuso a la petición de copia de su expediente, por contener datos privados a los que no entendía que no debe tener acceso [REDACTED] y por cuanto que esta mercantil no tiene la condición de interesada en el expediente. Entendía que bastaría que se le indicase la fecha en la que tuvo entrada la petición previa de autorización por [REDACTED].

La resolución aquí recurrida entiende que al no tener [REDACTED] la condición de interesado en el expediente, sólo puede acceder a la información en razón de la normativa de transparencia. Y sobre esta base, se considera que los límites del artículo 15 de la Ley 19/2013 (protección de datos) que alega [REDACTED] no son absolutos, además de que no concurren otros posibles límites del artículo 14.

Ya de modo concreto, la resolución recurrida entiende que en razón del artículo 11 de la Ley 15/99 de protección de datos no cabe el acceso del solicitante a los datos de carácter personal aportados al expediente, y que por aplicación de los artículos 34.1. i y 95 de la Ley General Tributaria, no pueden ser cedidos ni comunicados al solicitante los datos de carácter tributario incorporados al expediente. Así las cosas, la resolución recurrida limita el acceso al expediente a [REDACTED] a

los documentos que contienen la actividad pública, sin comunicación de datos tributarios ni datos de carácter personal, esto es, el escrito de inicio del expediente que motiva la actividad pública (cuya fecha de registro de entrada y posterior tramitación supuso la inadmisión de la solicitud de [REDACTED]), así como la petición de informes llevada a cabo por la Administración y el acto administrativo por el que se resuelve el expediente.

Segundo.- Efectuada la deliberación del asunto por esta Comisión Ejecutiva, sin que haya sido posible cumplir el plazo oportuno por razones inherentes a la constitución de este nuevo órgano, se adopta la presente resolución bajo los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Conforme al art. 24.1 en relación con el 42.1 de la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana (en adelante Ley 2/2015 valenciana), el órgano competente para resolver las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información, es la Comisión Ejecutiva con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Segundo.- En el presente supuesto, y como se ha expuesto en antecedentes, la Administración ha reconocido a [REDACTED] (un tercero que no es parte en este procedimiento) únicamente el acceso a los documentos del expediente –sin comunicación de datos tributarios ni datos de carácter personal– limitados al escrito de inicio del expediente que motiva la actividad pública así como la petición de informes llevada a cabo por la Administración y el acto administrativo por el que se resuelve el expediente.

Hay que subrayar que este tercero no es parte en el presente procedimiento, de modo que ninguna parte ha requerido un mayor acceso a la información que el que en su resolución la Administración ha reconocido, por lo que obviamente no puede este Consejo reconocer un mayor acceso a la información.

Así pues, y frente a la resolución recurrida, la parte reclamante ([REDACTED]) se opone a que se facilite información alguna de su expediente a un tercero ([REDACTED]) tanto por tratarse de datos privados cuanto porque [REDACTED], no tiene la condición de interesada en el expediente. Se afirma que dicha mercantil no tiene interés en acceso a un expediente administrativo de solicitud de autorización de salón recreativo tramitado por otra empresa operadora, cuando la inadmisión de su solicitud de autorización de salón recreativo se ha debido única y exclusivamente a una cuestión de preeminencia temporal en la presentación de la correspondiente solicitud. Se afirma por la parte reclamante que a [REDACTED] le bastaría, a lo sumo, con que la administración le indicara cual fue la fecha en que [REDACTED] presentó su solicitud de autorización, nada más, que facilitar la información solicitada es contrario a la buena fe y supone un evidente abuso de derecho.

Tercero.- El derecho de acceso a la información pública reconocido en España incluye como punto de partida el acceso a información pública contenida o no en un expediente o procedimiento administrativo y sea cual fuera el estado de tramitación (abierto o cerrado) del mismo. Se podría oponer a esta afirmación que el acceso a la información por “los interesados en un procedimiento administrativo” vendrá determinado por “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo”, en virtud de la Disposición adicional primera de la Ley 19/2013, relativa a las “Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública”.

Sin embargo, esta regulación supone una conexión normativa lógica del régimen general de acceso a la información con el tratamiento específico del acceso por parte de los interesados al expediente, lo cual es propio del procedimiento. Y es que los interesados contarán con un régimen especialmente privilegiado de acceso a la información pública contenida en sus expedientes, régimen que será el especialmente regulado por las normas del procedimiento, mientras que el resto de la ciudadanía se someterá al régimen general de la Ley 19/2013 y a los límites previstos por sus artículos 14 y 15.

Obviamente, entre estos límites, en no pocas ocasiones habrán sobrados motivos para que pueda denegarse total o parcialmente el acceso a la información a los que no son interesados en razón de los diversos intereses y derechos que se dan por tratarse de un procedimiento o expediente que está pendiente de resolución. Pero en modo alguno y por principio la legislación general de acceso a la información veda el acceso a expedientes sean o no abiertos o cerrados.

Ello ha de ser así bajo el principio de máxima transparencia y de interpretación restrictiva de todo límite al derecho constitucional de acceso a la información pública; la Disposición adicional primera en modo alguno puede interpretarse restrictivamente, derivando un límite al acceso a la información que su propio texto no contiene. La ley no hace referencia alguna a que el acceso a la información está vedado a expedientes y, es más, a expedientes que están en trámite o abiertos. Como ha señalado con acierto la autoridad catalana y que aquí seguimos: “Si la voluntad del legislador fuera la de denegar el acceso a los expedientes cerrados, ya lo habría establecido, y no lo hace, ni por activa ni por pasiva. Más bien todo lo contrario” (ver Resolució de 23 de desembre de 2015, de finalització de la Reclamació 17/2015, disponible en www.gaip.cat). Y es que la misma Ley 19/2013 en su Exposición de Motivos (II) afirma que la ley supera a la ya vieja normativa administrativa que limitaba el acceso a los procedimientos administrativos ya finalizados (“Pero esta regulación adolece de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica.”).

Es más, pese a que el interesado goce de un régimen de acceso a la información especialmente intenso, también puede acudir a la normativa general de acceso a la información pública y a su sistema de garantías. Como se deriva de las exigencias internacionales y la propia legislación española, el solicitante de información no tiene ni que motivar su solicitud (art. 17. 3º Ley 19/2013), por lo que tan siquiera tiene que alegar la norma que ampara su solicitud. Como dispone expresamente en este sentido el artículo 11 de la Ley 2/2015 valenciana, “Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar la ley.” Así las cosas, si el interesado en un procedimiento solicita la información al amparo de la legislación y garantías del derecho de acceso a la información, el sujeto obligado tendrá que facilitar la información valorando la posible aplicación de los límites y excepciones de los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013 respecto de la solicitud de información. Obviamente, para esta valoración tendrá en cuenta que la posición jurídica de interesado favorecerá las posibilidades de acceso a la información.

Pues bien, sobre la base de este criterio ya asentado en sus resoluciones por este Consejo, y como punto de partida, no es obstáculo a la solicitud de información por un tercero el hecho que se trate de información contenida en un expediente abierto o cerrado. Procede, por tanto, analizar si la información a la que se ha dado acceso por la Administración recurrida había de ser restringida por alguna de las causas de la ley.

Cuarto.- La Administración sólo facilita información del inicio del expediente que motiva la actividad pública, así como la petición de informes llevada a cabo por la Administración y el acto administrativo por el que se resuelve el expediente. Y todo ello con la expresa mención de que dicha información habrá de facilitarse “sin información de datos personales ni fiscales”.

La parte que pidió dicha información no es parte en el presente procedimiento, por lo que, como se ha adelantado, este Consejo no puede resolver que en su caso hubiera incluso procedido facilitar más información que la reconocida en la resolución recurrida. Y se considera que el acceso reconocido por la Administración sí que es procedente, por lo que procede ratificar dicha resolución.

De un lado, no concurren posibles límites relativos a datos personales a los que hace mención el artículo 15 de la Ley 19/2013, dado que la resolución hace expresa referencia a que no se faciliten tales datos. De otro lado, no se entiende ni se alega de modo concreto, que entre la información que debe facilitarse concorra alguno de los posibles límites del artículo 14.

Hay que partir de que cualquier sujeto –interesado o no- pueda fiscalizar de algún u otro modo la actividad Administrativa accediendo a la información administrativa. Ello contribuye a la misma legitimación de la Administración. Sólo ante el posible daño a alguno de los derechos o intereses tutelados por el artículo 14 puede denegarse el acceso a la información. La facilitación de información

limitada en el presente caso no permite considerar que se pueda dar el referido daño mencionado por la parte reclamante y que, en su caso, la afectación que pueda darse, supere el interés en que cualquier tercero pueda acceder a la información de la actuación administrativa.

RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos procede:

Desestimar la reclamación interpuesta por [REDACTED] contra la Resolución del Director General de Tributos y Juego, por la que se estima parcialmente la solicitud formulada por la mercantil [REDACTED], sobre acceso a copia del expediente de concesión de autorización de instalación de salón de juegos en favor de [REDACTED]

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con el artículo 10. 1 m) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO**

[REDACTED]

Ricardo García Macho